Legitimidad, Justicia y la Justificación de la Violencia Intergrupala entre Carabineros y Manifestantes en Chile

Legitimacy, Justice and Justification of Intergroup Violence between the Police and Protestors in Chile

Mónica M. Gerber¹, Ana Figueiredo², Luciano Sáez^{1,3} y Macarena Orchard⁴

¹ Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales

² Escuela de Psicología, Universidad Academia de Humanismo Cristiano

³ Universidad de Buenos Aires

⁴ Escuela de Sociología, Universidad Diego Portales

Agradecimientos: Esta investigación fue financiada por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), CONICYT/FONDAP/15130009; por la Universidad Diego Portales, y por una beca Seedcorn de la European Association of Social Psychology (EASP). No existe ningún conflicto de interés que revelar.

La correspondencia relativa a este artículo debe ser dirigida a Ana Figueiredo, Escuela de Psicología, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Av. Condell 343, Providencia, Santiago, Región Metropolitana, Chile. Email: figueiredo.anacm@gmail.com

RESUMEN

¿Por qué justifican las personas la violencia intergrupala ejercida entre carabineros y manifestantes en protestas sociales? En este artículo se examinan las actitudes hacia la violencia perpetrada por carabineros contra manifestantes y la violencia ejercida por manifestantes contra policías en el marco del contexto post estallido social del 18 de octubre de 2019 en Chile. Evaluamos el papel que juegan la percepción de injusticia en los procedimientos y el trato de carabineros hacia manifestantes, la evaluación de la legitimidad de de carabineros y la identificación grupal con manifestantes y carabineros en predecir la justificación de la violencia. Presentamos los resultados de una encuesta sobre legitimidad y violencia policial realizada a adultos en Chile durante enero del 2021 (n=2.717). A través de un análisis de senderos se encontró que la percepción de injusticia en los procedimientos a través de los cuales carabineros trata a los manifestantes es un factor clave al predecir la percepción de legitimidad de carabineros, especialmente entre personas que se identifican con los manifestantes. Es más, al reducir la legitimidad de carabineros, la percepción de injusticia en los procedimientos y el trato se traducen en una menor justificación de la violencia de carabineros y una mayor justificación de la violencia de manifestantes. El artículo termina destacando la importancia de considerar las percepciones de injusticia en los procedimientos y el trato de carabineros para lograr reducir el conflicto entre carabineros y manifestantes en protestas en Chile.

Palabras clave: violencia intergrupala, justicia procedimental e interaccional, legitimidad social, carabineros, manifestaciones

ABSTRACT

Why do people justify intergroup violence between police and protesters in social protests? This article examines attitudes towards the violence perpetrated by police officers against protesters and the violence carried out by protesters against police officers in the context of the post-social outbreak of October 18, 2019 in Chile. We evaluate the role played by the perception of injustice in the procedures and the treatment of police officers towards protesters, the evaluation of the legitimacy of police officers and group identification with protesters and police officers in predicting the justification of violence. We present the results of a survey on legitimacy and police violence carried out among adults in Chile during January 2021 ($n = 2,717$). Through a Path Analysis, we found that the perception of injustice in the procedures through which the police treat protesters is a key factor in predicting the perception of legitimacy of the police, especially among people who identify with the protesters. Furthermore, by reducing the legitimacy of the police, the perception of injustice in the procedures and the treatment translates into lower levels of justification of police violence and to greater levels of justification of protestor violence. The article finishes by highlighting the importance of considering the perceptions of injustice in the procedures and treatment of police officers in order to reduce the conflict between police officers and protesters in Chile.

Keywords: intergroup violence, procedural and interactional justice, social legitimacy, police, protesters

Introducción

En octubre de 2019 Chile presenció una de las mayores movilizaciones desde el retorno a la democracia en 1990. El “estallido social” agudizó el declive en la confianza institucional y generó una oleada de protestas a nivel nacional que aún continúan. En este contexto, una parte de la manifestación ha apelado a repertorios violentos para presionar cambios sociales, mientras que la represión policial ejercida por Carabineros (la policía chilena) es considerada como una de las más graves crisis en derechos humanos desde el fin de la dictadura cívico-militar (Amnistía Internacional, 2019; Human Rights Watch, 2019; INDH, 2019). Estas situaciones han reducido la confianza hacia Carabineros a niveles históricamente bajos (CEP, 2019). Adicionalmente, las medidas de control social frente a la actual crisis socio-sanitaria generada por la pandemia por COVID-19 podrían estar contribuyendo a aumentar una percepción negativa sobre la institución de Carabineros y las autoridades en general.

En este escenario, la justificación del uso de la violencia contra diversos grupos se ha convertido en reflejo de la actual crisis de legitimidad. Así, para algunas personas parece razonable la utilización de violencia para imponer demandas (violencia para el cambio social) en un contexto de baja confianza institucional. Para otras, la violencia policial se justifica si tiene como fin aumentar el orden y seguridad en un contexto de alta efervescencia social (violencia para el control social). Lo anterior da cuenta de la relevancia de analizar la aceptabilidad de la violencia intergrupala hacia carabineros y hacia manifestantes en un contexto de baja legitimidad de las fuerzas de orden y una intensa movilización social marcada por la represión policial, violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos y percepciones de injusticia. Los enfrentamientos violentos entre policía y manifestantes pueden ser considerados actos de violencia intergrupala, ya que el uso de la fuerza por parte de ambos grupos tiende a reforzarse mutuamente. Estos enfrentamientos han generado un proceso de diferenciación entre el endogrupo y el exogrupo, y por ende, un mayor potencial de recurrir a la violencia para lograr los objetivos de cada uno de los grupos.

El objetivo de este artículo es analizar los vínculos entre las actitudes hacia la aceptabilidad de la violencia intergrupala a carabineros y manifestantes, los juicios sobre la legitimidad de carabineros y las percepciones sobre la justicia procedimental y del trato de la policía hacia manifestantes. Estudios anteriores han relevado la importancia de entender la justificación de la violencia desde el marco de las teorías de legitimación de las autoridades y percepciones de justicia procedimental. En ese sentido, desde los estudios en justicia procedimental y legitimidad de las autoridades (Tyler & Blader, 2003) esta última es fundamental en la reducción de niveles de aceptación de la violencia hacia diversos grupos reduciendo el recurso de la fuerza para lograr control social por parte de las autoridades y la reivindicación de derechos por parte de manifestantes (Gerber & Jackson, 2017). La legitimidad permite que la ciudadanía respete voluntariamente a las autoridades sin la necesidad de recurrir al uso de la fuerza. Para ello, sin embargo, las autoridades deben interactuar a través de un trato procedimentalmente justo, respetuoso y neutro (Tyler & Blader, 2003). El trato procedimentalmente justo es relevante ya que, cuando las personas perciben que las autoridades utilizan procedimientos justos y neutrales, se sienten valoradas y aceptadas en

el grupo. Bajo estas condiciones es más probable que actúen de manera beneficiosa para la sociedad y que obedezcan voluntariamente a las autoridades (Tyler & Blader, 2000). La percepción de justicia es clave en predecir hasta qué punto las personas perciben a las autoridades como actores legítimos (Mazerolle, Antrobus, Bennett & Tyler, 2013; Tyler, 2006a, 2006b), mientras que la legitimidad predice la voluntad de las personas de ceder ante las autoridades y cooperar con ellas (Jackson, Bradford, Hough, Myhill, Quinton, & Tyler, 2012; Sunshine & Tyler, 2003). De ese modo, la justicia procedimental y la legitimidad resultan relevantes en contextos de relaciones intergrupales conflictivas. Tal como han demostrado investigaciones pioneras en esta línea, tanto la justicia procedimental como la legitimidad predicen la aceptación pública de la violencia empleada por la policía contra grupos (Jackson, Hug, Bradford & Tyler, 2013; Bradford, Milani & Jackson, 2017; Gerber & Jackson, 2017; Gerber, et al., 2018) así como por manifestantes (Jackson, Huq, Bradford y Tyler, 2013; Maguire, Barak, Cross & Lugo, 2016; Tyler, Barak, Maguire & Wells, 2018). En el contexto nacional existe una incipiente literatura sugiriendo que las percepciones de justicia y legitimidad son fundamentales para entender la disposición de las personas a utilizar la violencia para lograr cambios sociales (Gerber, et al., 2018; Gerber, et al., 2021).

En este artículo presentamos los resultados de una encuesta sobre legitimidad y violencia policial aplicada en enero del año 2021 a personas mayores de 18 años en Chile ($n=2.717$). A través de un análisis de senderos evaluamos el efecto de percibir injusticia en los procedimientos y el trato ejercido por carabineros hacia manifestantes en la percepción de legitimidad de carabineros y la justificación de ambas formas de violencia. El artículo se estructura de la siguiente manera. Primero se presenta y discute literatura sobre las actitudes hacia la violencia intergrupar considerando la relevancia de la justicia procedimental y la legitimidad como predictores. Luego, en un segundo lugar, se describe y contextualiza el conflicto entre manifestantes y carabineros en el contexto de las protestas que se han estado realizando desde octubre del 2019 en Chile. En tercer lugar, se presenta el caso de las actitudes hacia la violencia entre carabineros y manifestantes y se presentan las hipótesis de este estudio. A continuación se describe la metodología del estudio y se reportan los resultados del mismo. Finalmente, se discuten los resultados y se enfatizan las implicaciones de la investigación actual para el desarrollo del conflicto entre carabineros y manifestantes.

Actitudes hacia la violencia intergrupar

La violencia intergrupar se conceptualiza como actos o intenciones comportamentales negativas en contra de miembros de un exogrupo, con el objetivo de generar daño físico y/o psicológico (Esses & Garcia, 2010). Esta violencia ocurre en contextos donde distintos grupos sociales (dos o más) se ven enfrentados a intereses distintos, por lo cual se generan actitudes violentas hacia miembros de otros grupos sociales (Castano, 2008). Por otro lado, las actitudes hacia la violencia intergrupar se pueden definir como creencias sobre el grado en que es aceptable o no hacer uso de violencia en contra de miembros de otro grupo social (Gerber, et al., 2018). En este artículo nos enfocamos en dos tipos de actitudes hacia la violencia intergrupar: actitudes hacia la violencia generada por manifestantes para la exigencia de transformaciones (violencia para el cambio social) y actitudes hacia la violencia perpetrada por

carabineros contra manifestantes (violencia para el control social). Por un lado, la violencia para el cambio social ocurre en situaciones donde miembros de un grupo social actúan con el objetivo de lograr cambios sociales, tales como cambios en las estructuras jerárquicas o normativas de la sociedad. Por otro lado, la violencia para el control social se refiere a situaciones donde la violencia es ejercida por miembros de un grupo para mantener el status quo o donde el objetivo de la violencia es reducir el potencial de cambio en las estructuras jerárquicas o normativas de la sociedad. En nuestro estudio, ocupamos indicadores de actitudes hacia la violencia intergrupar en el contexto de manifestaciones, en las cuales los protestantes se enfrentan de manera violenta contra la policía (violencia para el cambio social) y la policía actúa de manera violenta para contener los manifestantes (violencia para el control social).

Justicia procedimental, legitimidad y justificación de la violencia

La justicia procedimental se puede definir como el grado de equidad existente en los procesos que personas en distintas posiciones de autoridad ocupan para alcanzar resultados o decisiones específicas (Donner, Maskaly, Fridell, & Jennings, 2015). De acuerdo con la literatura previa, las personas dan mucha importancia a la imparcialidad de los procedimientos que utilizan los titulares del poder para ejercer su autoridad (Tyler & Blader, 2000). Percibir que las autoridades actúan de manera justa, equitativa y neutral cuando interactúan con otras personas es un factor relevante por distintas razones. Primero, los procedimientos y maneras en que son implementados distintos procesos son importantes porque proporcionan información relevante para la identidad dentro de un contexto intergrupar (Blader & Tyler, 2009; Bradford, Hohl, Jackson, & MacQueen, 2015; Bradford, Murphy, & Jackson, 2014), pues las personas buscan mantener una identidad positiva y derivan parte de su identidad - su yo social - de los grupos a los que pertenecen (Abrams & Hogg, 1988; Tajfel & Turner, 1979). Así, en contextos sociales, los individuos evalúan su propio estatus dentro de sus grupos de pertenencia y el estatus de su grupo vis a vis otros grupos (juicios de estatus) basándose en cómo son tratados por las autoridades. Experimentar procedimientos justos y equitativos lleva a las personas a sentirse miembros valorados del grupo que representa la autoridad y tiene implicancias para la manera en cómo se comportan, pues si se sienten valorados, tienen más tendencia a actuar de acuerdo con lo que esperan las autoridades. Por otro lado, la justicia procedimental determina la medida en que las personas perciben a las autoridades como actores legítimos. La legitimidad es el reconocimiento de que las autoridades tienen el derecho de gobernar y la autoridad de dictar el comportamiento apropiado (Beetham, 1991; Jackson et al., 2012; Trinkner & Tyler, 2016; Tyler, 2006a; Tyler & Jackson, 2013). Así, la legitimidad es relevante porque permite a las autoridades gobernar de manera efectiva sin tener que depender del uso de la fuerza. Investigaciones previas sobre la legitimidad han demostrado que cuando las personas perciben que la policía actúa de manera justa, tienden a creer en mayor medida que comparten valores y normas con la policía y sienten que la policía debe ser obedecida (Jackson et al., 2012; Mazerolle et al., 2013; Murphy & Cherney, 2012; Sunshine & Tyler, 2003; Tyler, 2006a; Tyler & Jackson, 2014). Una mayor legitimidad policial, a su vez, se asocia con una mayor disposición para cumplir con la ley (Murphy, Bradford & Jackson, 2016), cooperar con las autoridades (Jackson et al., 2012; Tyler, 1990, 2011) y empoderar a las fuerzas de orden (Sunshine & Tyler, 2003). No obstante, en contextos de baja percepción de legitimidad de las

autoridades, es más probable que las personas no cumplan con las órdenes de la autoridad y recurran a actos violentos para mostrar su descontento con las autoridades. En este artículo, buscamos analizar de qué manera las percepciones de injusticia procedimental se asocian con percepciones de legitimidad de Carabineros y con actitudes hacia la violencia por parte de la policía, pero también por parte de los/as manifestantes.

Las percepciones de justicia y legitimidad no solamente son relevantes para predecir el cumplimiento de las normas y la obediencia. Investigaciones pioneras en este tema han mostrado que la justicia procedimental y la legitimidad son también relevantes en predecir la aceptación pública de la violencia empleada por la policía contra distintos grupos (Jackson, Hug, Bradford & Tyler, 2013; Bradford, Milani & Jackson, 2017; Gerber & Jackson, 2017; Gerber, et al., 2018) así como por manifestantes (Jackson, Huq, Bradford y Tyler, 2013; Maguire, Barak, Cross & Lugo, 2016; Tyler, Barak, Maguire & Wells, 2018). En el contexto nacional sólo dos estudios han analizado la conflictividad intergrupala desde este marco analítico (Gerber, et al., 2018; Gerber, et al., 2021). En ambos estudios, los resultados sugieren que el trato injusto incide negativamente en la creencia en la legitimidad de las autoridades. A su vez, menores niveles de legitimidad de Carabineros reducen la confianza en el uso de violencia estatal y aumentan la justificación de la violencia como forma de reivindicar derechos por parte de grupos indígenas (Gerber, et al., 2018). A su vez, menor creencia en la legitimidad de las autoridades motiva, en mayor medida, el uso de estrategias no-normativas (entre ellas, violentas) para lograr el cambio social. El presente artículo busca extender esta investigación incipiente estudiando el caso de la violencia entre carabineros y manifestantes en el contexto de las manifestaciones que se han llevado a cabo en Chile desde octubre del año 2019.

Violencia en el estallido social en Chile

El “estallido social” del 18 de octubre de 2019 causó una gran conmoción, tanto por evidenciar el malestar de la sociedad chilena a través de movilizaciones masivas a nivel nacional, como también, por la violencia estatal ejercida principalmente por Carabineros contra manifestantes, la que se tradujo en graves violaciones a los derechos humanos (INDH, 2019). En particular, la represión ejercida por carabineros en manifestaciones no es un asunto nuevo, sino que ha ido tomando mayor visibilidad en la medida que las movilizaciones se han tornado más masivas y recurrentes desde el retorno a la democracia en el país. Así, desde inicios de la transición democrática se ha registrado un lento y progresivo aumento en la movilización social, mientras que la violencia cometida por carabineros ha sido un tema que ha cobrado diversos niveles de visibilidad debido a la continuidad de casos de abuso y tortura (Fuentes, 2004; UDP, 2004).

Si bien durante la década de los noventa hubo un bajo registro de movilizaciones, pese al creciente grado de malestar y desafección política (Jara, 2019; Somma & Bargsted, 2015), esta situación cambió a mediados en la década del dos mil a raíz de coyunturas tales como el movimiento estudiantil de 2006, y principalmente, con su reactivación en 2011. Este último inauguró un ciclo de protestas que se ha extendido hacia otros actores sociales registrándose un aumento de hechos de protesta, así como una mayor diversidad en sus repertorios y formas de participación (Donoso & von Bülow, 2017; Somma & Medel 2016). Estas han ido desde

manifestaciones pacíficas (vinculados a formas de acción colectiva normativa) a repertorios más violentos (asociados a formas de acción colectiva no-normativa) (Gerber, et al., 2021; Orellana, 2020). De forma paralela, los distintos gobiernos han endurecido gradualmente las medidas de control coactivo del orden público a través de la criminalización y mayor penalización de las manifestaciones enfrentándolas principalmente como un problema de violencia (Bonner, 2019; Dammert, 2020; Jiménez-Yañez, 2020). En ese sentido, la represión ha ido en aumento mediante el control policial realizado por carabineros a la protesta (Bonner, 2018). Casos como el de Matías Catrileo (joven mapuche asesinado por carabineros en 2008), Manuel Gutiérrez (joven asesinado por carabineros en el marco de una manifestación en 2011), así como el de Rodrigo Avilés (impactado por el carro lanza aguas en 2015), entre otros, han marcado en el debate sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de carabineros hacia manifestantes en los últimos años. A ello se suman las denuncias realizadas en el marco del conflicto mapuche, así como por trabajadores y estudiantes secundarios.

Pese a este escenario, los niveles de confianza hacia Carabineros se encontraban entre los más altos, siendo una de las instituciones mejores evaluadas (con una aprobación que ronda el 40% en la última década) en un contexto de crisis de confianza institucional (Dammert, 2019). No obstante, casos de corrupción (“Pacogate”) y montajes (“Operación Huracán”) han puesto en debate la legitimidad policial y la necesidad de una reforma. De ese modo, ante el retroceso en las fuentes tradicionales de legitimación, las desigualdades se han vuelto más insostenibles haciendo posible la justificación de acciones colectivas no-normativas para la búsqueda de un cambio social (Somma, Bargsted, Pavlic & Medel, 2020; Gerber, et al., 2021). En este contexto, el 4 de octubre de 2019 el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones establece mediante un panel de expertos el aumento en la tarifa del transporte público (Red de Transporte Público Metropolitano). En respuesta, estudiantes secundarios comenzaron a realizar evasiones masivas en las distintas estaciones de Metro en Santiago, las que se intensificaron en las semanas siguientes. Como respuesta, el gobierno de Sebastián Piñera aumentó el contingente policial en las estaciones y cerró otras generando el malestar de la población. El 18 de octubre las manifestaciones continuaron, generando el cierre anticipado de la red. Esta situación dejó alrededor de 2,5 millones de usuarios sin transporte, situación que desencadenó una escalada de violencia que culminó esa noche con la destrucción de varias estaciones de metro (González & Le Foulon, 2020).

El 19 de octubre, a partir de la extensión de la movilización a otras ciudades del país, el presidente de la república decretó Estado de Emergencia y toque de queda en la Región Metropolitana solicitando el apoyo de las Fuerzas Armadas para el control del orden público por primera vez desde la dictadura cívico-militar. Este hecho aumentó el malestar generalizado. De ese modo, manifestaciones que comenzaron como una reacción al aumento de tarifas se extendieron reflejando un descontento masivo frente a la desigualdad económica, exigiendo el reconocimiento de derechos y garantías sociales (Amnistía Internacional, 2019; Human Rights Watch, 2019). En las semanas siguientes aumentaron las manifestaciones, en su mayoría de carácter pacífico (cabildos, caceros, así como no normativas (disturbios, saqueos, incendios y enfrentamientos directos con la policía). Como respuesta al control de las protestas, las Fuerzas Armadas y principalmente Carabineros intervinieron ejecutando graves acciones

de abuso y vulneraciones a los Derechos Humanos, lesionando a miles de personas. En relación a las acciones realizadas, los agentes estatales (Fuerzas Armadas y Carabineros) han sido acusados de numerosos actos de tortura, abusos y tratos inhumanos o degradantes, además de la utilización de munición letal contra manifestantes (Amnistía Internacional, 2019). Esta situación ha sido denunciada como un caso de violencia estatal sin precedentes, y como la más grave crisis en materia de derechos humanos desde el retorno a la democracia (Amnistía Internacional, 2019; INDH, 2019). En términos de contabilización de denuncias, hasta el 30 de noviembre de 2019 se estima que un total de 1.234 personas denunciaron ser víctimas de tortura, 282 fueron víctimas de tortura con violencia sexual, seis personas murieron a manos funcionarios de Fuerzas Armadas y Carabineros y 347 sufrieron traumas oculares (INDH, 2019). Estos últimos, a marzo de 2020, sumaban un total de 411 (Fiscalía, 2020). Por su parte, en relación con los autores de la violencia, un 92% del total corresponde a carabineros, 5% a militares, 2% a personal de la Policía de Investigaciones, y un 1% a personal de Gendarmería (INDH, 2019).

Las manifestaciones masivas se mantuvieron con regularidad hasta marzo de 2020, momento en que cesaron para contener la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19. En este contexto, el gobierno impuso medidas de restricción a las libertades individuales mediante la declaración de estado de catástrofe en marzo del mismo año. Entre ellas, restricciones a la libertad de circulación y toque de queda nocturno (Amnistía Internacional, 2021). No obstante, a raíz de las consecuencias económicas y sociales profundizadas por la pandemia, las manifestaciones continuaron incorporando otros actores (personal de salud). A su vez, como consecuencia de las medidas implementadas por el gobierno para el manejo de la pandemia, trabajadores de la salud comenzaron a movilizarse siendo reprimidos por carabineros (CNN, 05 de septiembre de 2020). Además, organizaciones de subsistencia (ollas comunes) han denunciado detenciones ilegales y hostigamientos por parte de la policía uniformada (Amnistía Internacional, 2021). También se han denunciado otros casos de uso excesivo de la fuerza. El 24 de marzo de 2020 carabineros asesinó a Jonathan Reyes de un disparo durante el toque de queda (Solís, 26 de marzo de 2020). De la misma forma, en la medida que se atenuaron las medidas sanitarias, las protestas aumentaron generando nuevos enfrentamientos entre carabineros y manifestantes, donde han sido nuevamente denunciados actos de uso excesivo de la fuerza. En octubre de 2020, un manifestante de 16 años es arrojado por carabineros al río Mapocho desde el puente Pío Nono en la ciudad de Santiago (Amnistía Internacional, 2021). A estos hechos se suma en enero de 2021 el asesinato de un malabarista en la ciudad de Panguipulli, hecho que desencadenó una serie de manifestaciones que culminaron con la quema de los principales edificios públicos de la ciudad (Massai, Segovia, & Sepúlveda, 2021). Estas situaciones mantienen vigente las interrogantes sobre el actuar de los miembros de Carabineros, erosionando de ese modo la legitimidad de la institución, poniendo de relieve los niveles de justificación en el uso de la violencia contra manifestantes (violencia para el control) o de manifestantes hacia carabineros (violencia para el cambio social).

Este estudio

Tomando como referencia el conflicto entre carabineros y manifestantes en el marco del estallido social y el contexto actual de crisis sociosanitaria, levantamos datos de una encuesta sobre legitimidad y violencia de carabineros entre participantes chilenos mayores de 18 años. El objetivo de este estudio fue el de evaluar el rol de la percepción de justicia procedimental y el trato de carabineros hacia manifestantes, así como de la evaluación de legitimidad de carabineros en la justificación de dos formas de violencia intergrupala: la violencia generada por manifestantes para la exigencia de transformaciones (violencia para el cambio social); y la violencia perpetrada por carabineros contra manifestantes (violencia para el control social). En línea con un estudio previo realizado en Chile en el contexto del conflicto entre el estado y el pueblo mapuche mostró que efectivamente las percepciones de injusticia en el trato hacia los mapuche se vinculaban con menores percepciones de legitimidad de carabineros (en particular entre personas con una alta identificación con los mapuche). Las percepciones de legitimidad, por su parte, fueron predictores importantes de la justificación de la violencia: a mayor percepción de legitimidad de Carabineros, mayor justificación de la violencia de carabineros y menor justificación de la violencia de activistas mapuche (Gerber, et al., 2018). De esta forma, hipotetizamos en este estudio que (ver Figura 1):

- H₁. A mayor legitimación de carabineros, mayor justificación de la violencia de carabineros y menor justificación de la violencia de manifestantes
- H₂. A mayor percepción de injusticia procedimental en como carabineros trata a los manifestantes, menor legitimación de carabineros
- H₃. El efecto de la injusticia procedimental es particularmente relevante cuando el encuestado se identifica con los manifestantes.

Figura 1
Modelo hipotetizado

Método

Datos

Los datos de este estudio provienen de una encuesta panel online por cuotas según el sexo, edad y nivel socioeconómico de los/as participantes, la cual fue recolectada en enero de 2021. El universo muestral corresponde a todas las personas mayores de 18 años residentes en Chile. La muestra final está compuesta por 2.717 personas. El promedio de edad fue de 39 años, con un 52% de mujeres y un 23% residiendo en la Región Metropolitana. Con respecto al posicionamiento político de los encuestados, un 11% se identificó con la derecha, un 15% con el centro, un 20% con la izquierda y un 55% indicó no tener identificación política. Con respecto al nivel educacional de los encuestados, el 50% reportó tener educación media o menos, el 18% indicó tener educación técnica completa y el 32% educación profesional completa.

Mediciones

Las *percepciones de injusticia procedimental* de los participantes sobre el actuar de Carabineros se midieron ocupando seis ítems con una escala de respuesta de 1 (Nunca) a 5 (Siempre). Los ítems ocupados son: “¿Con qué frecuencia cree Ud. que los carabineros...?: a) “tratan a los manifestantes con dignidad y respeto?”; b) “cuando detienen a un manifestante le explican claramente las razones para detenerlo?”; c) cuando detienen a un manifestante lo hacen por razones justificadas?”; d) “al tratar a los manifestantes actúan de manera imparcial, sin hacer diferencias por clase social o etnia?”; e) “actúan de acuerdo a la ley?”; y f) “respetan los protocolos de detención y uso de la fuerza?”. Estos ítems fueron invertidos para construir una escala de injusticia procedimental.

La *legitimidad percibida de carabineros* fue medida mediante seis ítems, de los cuales tres miden *obediencia a la autoridad* (i.e. “Hay que respetar las decisiones que toman los carabineros, aunque no se esté de acuerdo con ellas”; “Hay que apoyar siempre las decisiones de los carabineros, incluso si cometen un error”; y “Hay que obedecer las decisiones que toman los carabineros porque es lo correcto”) y los otros tres miden *alineamiento moral con carabineros* (i.e. “En general, los carabineros tienen la misma idea que yo sobre lo que está bien y lo que está mal”; “Los carabineros quieren las mismas cosas que yo para la sociedad”; y “Los carabineros actúan según lo que yo creo que es lo correcto”), adaptados de Gerber et al. (2018). Todos los ítems fueron contestados en una escala de 1 (Muy en acuerdo) a 5 (Muy en desacuerdo).

Para medir *justificación de la violencia de Carabineros*, se ocuparon los siguientes cuatro ítems con la misma pregunta inicial: “¿En qué medida cree Ud. que se justifican las siguientes acciones?: a) “Que los carabineros utilicen bombas lacrimógenas para disolver protestas”; b) “Que los carabineros disparen balines o perdigones cuando existe violencia en las manifestaciones”; c) “Que un carabainero golpee a un manifestante para evitar que siga destruyendo propiedad pública”; y d) “Que un carabainero golpee a un manifestante de la primera línea que está resistiendo al arresto”. Los ítems fueron medidos con una escala de 1 (Nunca) a 5 (Casi siempre).

La *justificación de violencia de parte de los/as manifestantes*, se midió preguntando “¿En qué medida cree Ud. que se justifican o no se justifican las siguientes acciones que algunos manifestantes pueden llevar a cabo en el marco de protestas?”, seguido de cuatro ítems específicos (i.e. “Realizar una manifestación aún cuando no esté autorizada”; “Desobedecer las órdenes de la policía de dispersarse al protestar”; “Bloquear calles aún cuando Carabineros les ordena que no lo hagan”; Ocupar edificios públicos”. Todos los ítems tienen una escala de respuesta de 1 (Nada justificable) a 5 (Muy justificable).

El *grado de identificación con el grupo manifestantes* se midió ocupando el ítem “Siento un vínculo cercano con los manifestantes de la primera línea”, con una escala de 1 (Muy en desacuerdo) a 5 (Muy en acuerdo).

El *grado de identificación con carabineros* se midió ocupando el ítem “Siento un vínculo cercano con los carabineros”, con una escala de 1 (Muy en desacuerdo) a 5 (Muy en acuerdo).

Finalmente, ocupamos como variables de control la edad y sexo de los participantes, el nivel socioeconómico (ABC1, C2, C3, D y E), la posición política (derecha, centro, izquierda, ninguna) y la región de residencia (1 = Región Metropolitana, 0 = otras regiones).

Análisis

El análisis se realizó en dos pasos. Primero, se evaluó un modelo de Análisis Factorial Confirmatorio de las cuatro escalas centrales para este estudio: percepción de injusticia en el trato de Carabineros a manifestantes, percepción de legitimidad de Carabineros, justificación de la violencia de Carabineros y justificación de la violencia de manifestantes. Este modelo consideró una medición de segundo orden para legitimidad, compuesto por dos subdimensiones: identificación moral con carabineros y obligación a obedecer a carabineros. Este modelo tuvo un buen ajuste según criterios convencionales ($\chi^2(162) = 1433,81$, $p < 0,01$, CFI = 0,97, TLI = 0,97, RMSEA = 0,054). A su vez, todos los coeficientes estandarizados de los ítems fueron significativos ($p < 0,01$) y se encontraron entre 0,73 y 0,93. En base a este Análisis Factorial Confirmatorio fueron estimados puntajes factoriales para cada persona en cada una de las escalas consideradas. La Tabla 1 resume las correlaciones entre los conceptos considerados utilizando puntajes factoriales (con la excepción de identificación con manifestantes y carabineros, dado que corresponden a ítems individuales).

Segundo, se estimó un modelo de Análisis de Sendero para evaluar un modelo que predice justificación de la violencia de carabineros y manifestantes en función de las percepciones de injusticia en los procedimientos de carabineros y la percepción de legitimidad de los mismos. A su vez, se incorporó la interacción entre identificación con los manifestantes y percepciones de injusticia procedimental como predictor de la legitimidad. Por último, se incluyeron como control en cada uno de los pasos la identificación con los carabineros, edad, nivel socioeconómico, posición política, ubicación (región metropolitana vs resto del país) y nivel educacional. Se optó por la realización de un Análisis de Senderos en vez de un Modelo de Ecuaciones Estructurales que considerara las variables como latentes debido al interés por incluir un análisis de mediación moderada y la dificultad de realizar esto con variables latentes.

Para lograr un modelo más parsimonioso, se eliminaron las variables sociodemográficas no significativas para cada variable dependiente. Nivel socioeconómico y región fueron eliminados como predictores de percepción de legitimidad, mientras que la región de residencia fue eliminada como predictor de justificación de la violencia de manifestantes y edad fue eliminado como predictor de justificación de la violencia de carabineros. El modelo estimado obtuvo un buen ajuste según criterios convencionales ($\chi^2(7) = 4.64$, $p = 0,70$, CFI = 1,00, RMSEA = 0,00).

Resultados

Tabla 1

Correlaciones entre conceptos de interés (n=2717)

	1	2	3	4	5
1 Percepción de injusticia procedimental					
2 Percepción de legitimidad de Carabineros	-0.93 **				
3 Identificación con los manifestantes	0.58 **	-0.6 **			
4 Identificación con los carabineros	-0.72 **	0.75 **	-0.43 **		
5 Justificación de la violencia de carabineros	-0.66 **	0.7 **	-0.48 **	0.52 **	
6 Justificación de la violencia de manifestantes	0.76 **	-0.81 **	0.62 **	-0.64 **	-0.56 **

** p < 0,01

Como se puede observar en la Tabla 1, todas las variables analizadas están relacionadas entre sí de manera estadísticamente significativa y según las hipótesis desarrolladas en este estudio ($p < 0,01$). Primero, la percepción de injusticia procedimental está negativamente asociada a la percepción de legitimidad de carabineros. Es decir, a mayor percepción de injusticia procedimental, menor percepción de legitimidad de carabineros. Además, la percepción de injusticia procedimental se asocia de manera positiva con la identificación con los manifestantes y con la justificación de violencia por parte de manifestantes. A su vez, la percepción de injusticia se asocia de manera negativa con la identificación con carabineros y con la justificación de violencia de parte de carabineros. La percepción de legitimidad de carabineros también se asocia de manera negativa con la identificación con los manifestantes

y la justificación de la violencia de parte de estos, a la vez que se asocia de manera positiva con la identificación de carabineros y la justificación de violencia de estos. Finalmente, y como esperado, la justificación de violencia de carabineros está negativamente asociada con la justificación de violencia por parte de manifestantes.

Los principales resultados del modelo de Análisis de Senderos se reportan en la Figura 2. Primero, se observó un efecto positivo significativo de la percepción de legitimidad de carabineros en la justificación de la violencia de carabineros ($\beta = 0,52, p < 0,01$) y uno negativo al predecir justificación de la violencia de manifestantes ($\beta = -0,51, p < 0,01$). Es decir, a mayor percepción de legitimidad de carabineros, mayor justificación de la violencia ejercida por carabineros y menor justificación de la violencia de manifestantes. Segundo, la percepción de injusticia en los procedimientos utilizados por carabineros hacia manifestantes tiene un efecto negativo en la percepción de legitimidad de carabineros. En particular, este efecto se encuentra moderado por el nivel de identificación con los manifestantes. Para personas con baja identificación con manifestantes, la percepción de injusticia reduce la percepción de legitimidad de carabineros ($\beta = -0,53, p < 0,01$) y este efecto es aún mayor entre quienes presentan una alta identificación con manifestantes ($\beta = -0,58, p < 0,01$). Este efecto de interacción entre percepción de injusticia e identificación con manifestantes tiene también efectos indirectos significativos en la justificación de la violencia de Carabineros y manifestantes. Para personas con baja identificación con los manifestantes, cada aumento en una desviación estándar en la percepción de injusticia procedimental se traduce en una disminución indirecta en la justificación de la violencia de carabineros de 0,35 desviaciones estándar ($p < 0,01$), mientras que para personas con alta identificación con manifestantes este efecto asciende a una disminución en 0,38 desviaciones estándar ($p < 0,01$). Con respecto a la justificación de la violencia de manifestantes, el efecto indirecto de la percepción de injusticia procedimental de carabineros se traduce en un aumento de 0,35 ($p < 0,01$) desviaciones estándar para personas con baja identificación con manifestantes y de 0,38 ($p < 0,01$) desviaciones estándar para personas con alta identificación con manifestantes.

Figura 2

Resultados de modelo de análisis de sendero que predice percepción de legitimidad de carabineros, justificación de la violencia de carabineros y justificación de la violencia de manifestantes (n=2.717).

Nota. Se presentan solamente las variables centrales del modelo. Los coeficientes son estandarizados. $** p < 0,01$

Por otra parte, también se encontraron algunos efectos de las variables de control consideradas como predictoras. Así, a mayor identificación con carabineros, mayor legitimación de los mismos ($\beta = 0,11$, $p < 0,01$) y menor justificación de la violencia de manifestantes ($\beta = -0,06$, $p < 0,01$). A mayor edad, mayor legitimación de carabineros ($\beta = 0,001$, $p < 0,01$) y menor justificación de la violencia de manifestantes ($\beta = -0,01$, $p < 0,01$). Los hombres presentaron una mayor legitimación de carabineros ($\beta = 0,03$, $p < 0,01$), una mayor justificación de la violencia de carabineros ($\beta = 0,26$, $p < 0,01$) y una mayor justificación de la violencia de manifestantes ($\beta = 0,15$, $p < 0,01$) que las mujeres. Se observaron diferencias importantes según posición política de los encuestados. Así, las personas de derecha legitimaron más a carabineros ($\beta = 0,08$, $p = 0,02$) y justificaron más la violencia de carabineros ($\beta = 0,23$, $p < 0,01$) que las personas sin posición política. Mientras tanto, las personas de izquierda legitimaron menos a carabineros ($\beta = -0,04$, $p = 0,01$), justificaron menos la violencia de carabineros ($\beta = -0,010$, $p = 0,02$) y justificaron más la violencia de manifestantes ($\beta = 0,22$, $p < 0,01$) que las personas sin posición política. La región en la que residen las personas solamente fue un predictor relevante de la justificación de la violencia de carabineros. Específicamente, las personas que viven en la Región Metropolitana justificaron más la violencia de carabineros que las personas que viven en otras regiones del país ($\beta = 0,11$, $p < 0,01$). La última variable sociodemográfica considerada fue el nivel educacional de las personas. Las personas de nivel socioeconómico ABC1 (el más alto) justificaron menos la violencia de carabineros ($\beta = 0,17$, $p = 0,01$) y más la violencia de manifestantes ($\beta = 0,18$, $p < 0,01$) que las personas de nivel socio-económico E (el más bajo). Las personas de nivel socioeconómico C2 justificaron menos la violencia de carabineros ($\beta = 0,22$, $p < 0,01$) y más la violencia de manifestantes ($\beta = 0,18$, $p < 0,01$) que las personas de nivel socio-económico

E. Las personas de nivel socioeconómico C3 justificaron más la violencia de manifestantes ($\beta = 0,16$, $p < 0,01$) que las personas de nivel socio-económico E. Las personas de nivel socio-económico D justificaron más la violencia de manifestantes ($\beta = 0,09$, $p = 0,046$) que las personas de nivel socio-económico E.

Discusión

Los resultados presentados muestran que las percepciones de injusticia en el trato y los procedimientos utilizados por carabineros hacia manifestantes son fundamentales para explicar la justificación que las personas hacen de la violencia entre carabineros y manifestantes. Consistente con las hipótesis planteadas, encontramos que a mayores percepciones de injusticia procedimental en el trato de carabineros a manifestantes menor es la legitimación de los carabineros (H_2). Como hipotetizado, este efecto fue mayor entre quienes se identifican ampliamente con los manifestantes (H_3). Sin embargo, cabe destacar que la percepción de injusticia procedimental fue significativa sin importar el nivel de identificación con los manifestantes. A su vez, la legitimación de carabineros fue un predictor relevante de la justificación de la violencia: a mayor creencia en la legitimidad del poder de los carabineros, mayor justificación de la violencia de carabineros y menor justificación de la violencia de manifestantes (H_1). Estos resultados son consistentes con investigación previa sobre el rol de las percepciones de injusticia de carabineros en la violencia entre carabineros y manifestantes mapuche en Chile (Gerber, et al., 2018).

Discutir la vinculación entre percepciones de injusticia desde una mirada intergrupala resultó ser relevante en cuanto sugiere que la injusticia no solamente es sentida por quienes la reciben de manera directa. En este estudio mostramos que es para quienes se identifican más con los manifestantes para quienes la injusticia contra este grupo resulta particularmente relevante. Esto es consistente con el argumento de Tyler (2000) acerca de cómo la justicia procedimental es particularmente relevante cuando incluye información identitaria relevante (ver también Murphy et al., 2017). A su vez, esto releva la importancia de considerar la creciente literatura sobre justicia procedimental aplicada a otros (van den Bos & Lind, 2001). La percepción de justicia en la manera en que las autoridades tratan a las personas es importante porque este trato comunica algo acerca del rol de este grupo en la sociedad. Percibir un trato injusto hacia un grupo -particularmente si alguien se identifica con este grupo- puede cambiar las actitudes hacia carabineros y la disposición a apoyar el uso de violencia como respuesta.

Resulta necesario destacar algunas limitaciones del presente estudio. Específicamente, cabe mencionar que los datos presentados corresponden a una encuesta transversal aplicada a una muestra por cuotas. Como tal, resulta importante ser precavidos al momento de derivar conclusiones que permitan inferir resultados a la población de chilenos/as, así como acerca de la vinculación causal entre los distintos conceptos considerados en este estudio. Estudios futuros deberían replicar esta investigación utilizando una muestra probabilística de chilenos/as. A su vez, un diseño experimental como el realizado por Gerber, et al. (2018) puede ayudar a evaluar si en el contexto del conflicto entre carabineros y manifestantes la justicia procedimental tiene un efecto causal sobre la legitimidad de carabineros. También

recomendamos, a futuro, hacer análisis longitudinales de los fenómenos aquí tratados, con el objetivo de estudiar el cambio en las percepciones de justicia procedimental, de legitimidad de las fuerzas policiales y las actitudes hacia la violencia intergrupar en contexto de manifestaciones. Distintos factores situacionales, tales como la actual pandemia producto del coronavirus, pueden afectar estos cambios en el tiempo.

En este artículo buscamos demostrar la importancia que las percepciones de justicia procedimental y de legitimidad de las fuerzas policiales tienen para la justificación de la violencia, tanto de parte de la policía como de manifestantes, en el contexto de protestas en Chile. Estos hallazgos tienen relevancia social pues apuntan a la necesidad de que las autoridades actúen de manera justa, neutral y respetuosa hacia la ciudadanía. Si las personas consideran que el trato que reciben de las fuerzas de orden no es adecuado ni justo, las percepciones de legitimidad de estas mismas fuerzas bajan, lo que conlleva una mayor justificación de violencia para el cambio social (desde la parte de manifestantes) y menos justificación de la violencia para mantener el orden social (desde la policía), potenciando la intensificación del ciclo de violencia. Así, el apoyo a la violencia para el cambio social podría reducirse si la policía garantiza un trato justo, respetuoso y neutral de los manifestantes. El trato justo también podría aumentar la confianza de los miembros de distintos grupos sociales hacia el actuar de la policía y, con esto, disminuir la justificación del uso de la violencia como manera de generar cambios sociales. En un momento en que se discuten potenciales reformas a las fuerzas de orden en varias partes del mundo, reconocer la importancia de la formación de los agentes de la autoridad en temas de justicia procedimental y legitimidad es de suma importancia y podrá traer beneficios a medio y largo plazo para las relaciones entre la ciudadanía y las autoridades en general.

Referencias

- Abrams, D., & Hogg, M. A. (1988). *Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes*. Routledge.
- Alcaíno, E. (2020). Violencia policial desde el Estallido Social. En, Universidad Diego Portales. *Informe anual de Derechos Humanos en Chile 2020* (pp.83-117). Centro de Derechos Humanos Universidad Diego Portales.
- Amnistía Internacional. (2019). *Ojos sobre Chile. Violencia Policial y Responsabilidad de mando durante el Estallido Social*. Amnistía Internacional.
- Amnistía Internacional. (2021). Informe Amnistía Internacional 2020/21. Capítulo Chile Ampliado. En, Amnistía Internacional, *Informe Amnistía Internacional 2020/21. La situación de derechos humanos en el mundo* (pp. 1-15). Amnistía Internacional.
- Beetham, P. D. (1991). *The Legitimation of Power*. Palgrave Macmillan.
- Blader, S. L., & Tyler, T. R. (2009). Testing and extending the group engagement model: Linkages between social identity, procedural justice, economic outcomes, and extrarole behavior. *Journal of Applied Psychology*, 94(2), 445–464.
- Bonner, M. (2018). *La gestión policial de la protesta en Argentina y Chile*. Ril Editores.
- Bonner, M. (2019). Protest and Police “Excesses” in Chile: The Limits of Social Accountability. En Policzer, P. (Ed.). (2019). *The politics of violence in Latin America*. University of Calgary Press.
- Bradford, B., Hohl, K., Jackson, J., & MacQueen, S. (2015). Obeying the rules of the road: Procedural Justice, Social Identity, and Normative Compliance. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 31(2), 171–191.
- Bradford, B., Murphy, K., & Jackson, J. (2014). Officers as Mirrors: Policing, Procedural Justice and the (Re)Production of Social Identity. *The British Journal of Criminology*, 54(4), 527–550.
- Bradford, B., Milani, J., & Jackson, J. (2017). Identity, legitimacy and “making sense” of police use of force. *Policing: An International Journal of Police Strategies and Management*, 40(3), 614-627
- Castano, E. (2008). On the perils of glorifying the in-group: Intergroup biolence, in-group glorification, and moral disengagement. *Social and Personality Psychology Compass*, 2(1), 154–170.
- Centro de Estudios Públicos (2019). *Estudio Nacional de Opinión Pública N°84*. Recuperado de https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20200116/20200116081636/encuestacep_diciembre2019.pdf

- CNN. (05 de septiembre de 2020). Marcha de TENS en Plaza Italia terminó con ocho detenidos: Exigen ser incluidos en el Código Sanitario. Recuperado de https://www.cnnchile.com/pais/marcha-tens-plaza-italia-8-detenidos-carabineros_20200905/
- Dammert, L. (2020). Carabineros de Chile ¿El modelo latinoamericano de seguridad?. *Análisis Carolina*, 25, 1-12. https://doi.org/10.33960/AC_25.2020
- Dammert, L. (2019). La crisis de Carabineros: cuando no vemos lo evidente. En Araujo, K. (ed.) *Hilos Tensados. Para leer el octubre chileno* (pp. 149-172). Colección IDEA.
- Donoso, S. & Von Bülow, M. (2017). *Social Movements in Chile. Organization, Trajectories, and Political Consequences*. Palgrave Macmillan.
- Donner, C., Maskaly, J., Fridell, L., & Jennings, W. G. (2015). Policing and procedural justice: A state-of-the-art review. *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 38(1), 153–172. doi:10.1108/pijpsm-12-2014-0129
- Esses, V. M., & Garcia, D. M. (2010). Intergroup violence. In J. M. Levine & M. A. Hogg, *Encyclopedia of group processes and intergroup relations*. Sage Publications Inc.
- Fiscalía. (2020). *Cifras Violencia Institucional 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020*.
- Fuentes, C. (2004). La inevitable "mano dura": sociedad civil y violencia policial en Argentina y Chile. *Revista de ciencia política*, 24(2), 3-28. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2004000200001>
- Gerber, M. M., & Jackson, J. (2017). Justifying violence: Legitimacy, ideology and public support for police use of force. *Psychology, Crime & Law*, 23(1), 79–95. <https://doi.org/10.1080/1068316X.2016.1220556>
- Gerber, M. M., González, R., Carvacho, H., Jiménez-Moya, G., Moya, C., & Jackson, J. (2018). On the justification of intergroup violence: The roles of procedural justice, police legitimacy, and group identity in attitudes toward violence among indigenous people. *Psychology of Violence*, 8(3), 379–389. <https://doi.org/10.1037/vio0000177>
- Gerber, M., Moya, C., Castillo, A., Orchard, M., Puga, I. (2021). Acting collectively to confront injustice: the mediating role of the legitimacy of authorities, *Studies in Psychology*, 42(1), 76-103. <https://doi.org/10.1080/02109395.2020.1857582>
- Gonzalez, R. & Le Foulon, C. (2020). The 2019–2020 Chilean protests: A first look at their causes and participants, *International Journal of Sociology*, 50(3), 227-235. 10.1080/00207659.2020.1752499
- Human Rights Watch. (2019). *Informe, Chile: Llamado urgente a una reforma policial tras las protestas. Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes; graves abusos en detención*. Recuperado de <https://www.hrw.org/es/news/2019/11/26/chile-llamado-urgente-una-reforma-policial-tras-las-protestas>

- Instituto Nacional de Derechos Humanos. (2019). *Informe Anual. Sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile en el contexto de la crisis social. 17 Octubre – 30 Noviembre 2019*. Recuperado de <https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/1701/Informe%20Final-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Jackson, J., Bradford, B., Hough, M., Myhill, A., Quinton, P., & Tyler, T. R. (2012). Why do People Comply with the Law? Legitimacy and the Influence of Legal Institutions. *British Journal of Criminology*, 52(6), 1051–1071.
- Jackson, J., Huq, A. Z., Bradford, B., & Tyler, T. R. (2013). Monopolizing force? Police legitimacy and public attitudes toward the acceptability of violence. *Psychology, Public Policy, and Law*, 19(4), 479–497.
- Jara, C. (2019). *(Des)movilización de la sociedad civil chilena: post-trauma, gobernabilidad y neoliberalismo (1990-2010)*. Ariadna Ediciones.
- Jiménez-Yañez, C. (2020). #Chiledespertó: causas del estallido social en Chile. *Revista Mexicana de Sociología*, 82(4), 949-957. <http://dx.doi.org/10.22201/iis.01882503p.2020.4.59213>
- Massai, N., Segovia, M. & Sepúlveda, N. (2021) Panguipulli en llamas. *Ciper*. Recuperado de <https://www.ciperchile.cl/2021/02/07/panguipulli-en-llamas/>
- Mazerolle, L., Antrobus, E., Bennett, S., & Tyler, T. R. (2013). Shaping Citizen Perceptions of Police Legitimacy: A Randomized Field Trial of Procedural Justice. *Criminology*, 51(1), 33–63. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2012.00289.x>
- Medel, R. & Somma, N. (2016). ¿Marchas, ocupaciones o barricadas? Explorando los determinantes de las tácticas de la protesta en Chile. *Política y gobierno*, 23(1), 163-199.
- Murphy, K., Bradford, B., & Jackson, J. (2016). Motivating Compliance Behavior Among Offenders: Procedural Justice or Deterrence?. *Criminal Justice and Behavior*, 43(1), 102–118.
- Murphy, K., Madon, N. S., & Cherney, A. (2017). Promoting Muslims’ cooperation with police in counter-terrorism. *Policing: An International Journal*, 40, 544-559.
- Murphy, K., & Cherney, A. (2012). Understanding Cooperation With Police in a Diverse Society. *British Journal of Criminology*, 52(1), 181–201.
- Orellana, N. (2020). Repertorios y espacio público de trabajadores y estudiantes en Chile a comienzos del siglo XXI. *Perfiles Latinoamericanos*, 28(56), 99-124. <http://doi.org/10.18504/pl2856-005-2020>
- Somma, N. & Bargsted, M. (2015). La autonomización de la protesta en Chile. En C. Cox & J. C. Castillo (Eds.), *Aprendizaje de la Ciudadanía: Contextos, experiencias y resultados* (pp. 207-240). Ediciones Universidad Católica de Chile

- Somma, N. & Medel, R. (2016). ¿Marchas, ocupaciones o barricadas? explorando los determinantes de las tácticas de la protesta en Chile. *Política y gobierno*, 23(1), 163-199.
- Somma, N., Bargsted, M., Pavlic, R. & Medel, R. (2020). No water in the oasis: the Chilean Spring of 2019–2020, *Social Movement Studies*, 20(4), 495-502. <https://doi.org/10.1080/14742837.2020.1727737>
- Solis, C. (26 de marzo de 2020). Exclusivo: Video muestra que Carabineros mató a vecino de Av La Paz sin recibir una amenaza inminente durante emergencia sanitaria. *Interferencia*. Recuperado de <https://interferencia.cl/articulos/exclusivo-video-muestra-que-carabineros-mato-vecino-de-av-la-paz-sin-recibir-una-amenaza>
- Sunshine, J., & Tyler, T. R. (2003). The role of procedural justice and legitimacy in shaping public support for policing. *Law & Society Review*, 37(3), 513-548.
- Tajfel, H., & Turner, J. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The social psychology of intergroup relations* (pp. 33–47). Brooks/Cole.
- Trinkner, R., & Tyler, T. R. (2016). Legal Socialization: Coercion versus Consent in an Era of Mistrust. *Annual Review of Law and Social Science*, 12(1), 417–439.
- Tyler, T. R. (1990). *Why people obey the law*. Yale University Press.
- Tyler, T. R. (2000). Multiculturalism and the Willingness of Citizens to Defer to Law and to Legal Authorities. *Law & Social Inquiry*, 25(4), 983-1019.
- Tyler, T. R. (2006a). Psychological Perspectives on Legitimacy and Legitimation. *Annual Review of Psychology*, 57(1), 375–400.
- Tyler, T. R. (2006b). *Why People Obey the Law*. Princeton University Press.
- Tyler, T. R. (2011). *Why People Cooperate: The Role of Social Motivations*. Princeton University Press.
- Tyler, T. R., & Blader, S. (2000). *Cooperation in Groups: Procedural Justice, Social Identity, and Behavioral Engagement: Procedural Justice, Social Identity, and Behavioural Engagement*. Psychology Press.
- Tyler, D. H., Barak, M., Maguire, E. R., Wells, W. (2018). The effects of procedural injustice on the use of violence against police by Occupy Wall Street protesters. *Police Practice and Research*, 19(2), 138-152. doi:10.1080/15614263.2018.1418153
- Tyler, T. R., & Blader, S. L. (2003). The group engagement model: Procedural justice, social identity, and cooperative behavior. *Personality and social psychology review*, 7(4), 349-361.
- Tyler, T. R. & Blader, S. L. (2000). Social Identity and Cooperative Behavior. In T. R. Tyler & S. L. Blader (Eds.) *Cooperation in Groups: Procedural Justice, Social Identity, and Behavioral Engagement* (pp. 143-168). Psychology Press.

- Tyler, T. R., & Jackson, J. (2013). Future Challenges in the Study of Legitimacy and Criminal Justice. In J. Tankebe & A. Liebling (Eds.), *Legitimacy and Criminal Justice: An International Exploration* (pp. 83–104). Oxford University Press.
- Tyler, T. R., & Jackson, J. (2014). Popular legitimacy and the exercise of legal authority: Motivating compliance, cooperation, and engagement. *Psychology, Public Policy, and Law*, 20(1), 78–95.
- Universidad Diego Portales. (2003). Abusos Policiales. En Universidad Diego Portales, *Informe anual sobre Derechos Humanos 2003* (pp. 108-117). Editorial Universidad Diego Portales.
- van den Bos, K., & Lind, E. A. (2001). The Psychology of Own Versus Others' Treatment: Self-Oriented and Other-Oriented Effects on Perceptions of Procedural Justice. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 27(10), 1324–1333.